

**MINISTERIO PUBLICO C/ CADAGÁN ANDRADE, MAURICIO DANIEL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, ART. 3, LEY 20.000**

R.U.C.: 2410006294-8

R.I.T.: 37 – 2025

Temuco, abril diez del año dos mil veinticinco.

VISTOS:

Teniendo presente que ante esta Sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco, integrada por las juezas **Patricia Abollado Vivanco**, presidiendo, y **Cecilia Subiabre Tapia** y el juez **José Ignacio Rau Atria**, el día 31 de marzo de los corrientes se llevó a efecto la audiencia de juicio oral de la causa Rol Único 2410006294-8, Rol Interno 37–2025, por acusación sostenida por el fiscal adjunto del Ministerio Público, **Miguel Velásquez Droguett**, en contra de **MAURICIO DANIEL CADAGÁN ANDRADE**, cédula de identidad N° 21.026.972-K, nacido en Valdivia, el 5 de mayo de 2002, 22 años, chileno, soltero, cuarto medio rendido, domiciliado en el pueblo Antilhue, Recinto Estación, calle Bernardo O'Higgins S/N, comuna de Los Lagos, representado por el abogado de la Defensoría Penal Pública, **Roberto Westermeyer Cabezas**.

Teniendo presente, asimismo, que:

1.- Según auto de apertura de febrero 25 de 2025 dictado por Eduardo Antonio Pérez Yáñez, Juez Titular del Juzgado de Garantía de Lautaro, la **acusación** afirma en su relación fáctica que

“el día 03 de enero de 2024, aproximadamente a las 06.40 hrs, personal de policía de investigaciones se encontraba desarrollando funciones en ruta 5 sur, km. 623, sector peaje Púa, comuna de Perquenco, oportunidad en la cual procedieron a fiscalizar el bus de la empresa “Ivergrama”, patente JGRZ.21, itinerario Santiago Villarrica, oportunidad en la cual, auxiliados por perros detectores de drogas, constataron que el imputado MAURICIO DANIEL CADAGÁN ANDRADE, que se trasladaba como pasajero del precitado bus, específicamente en el asiento 16, transportaba, guardaba, portaba y mantenía, en una mochila, la cantidad de 310 gramos de una sustancia que, sometida a prueba de campo, arrojó positivo a la presencia de THC cannabis; y, 385 gramos de una sustancia en polvo color blanco, que arrojó positivo para clorhidrato de cocaína”; y, que

2.- Los descritos hechos fueron calificados por el acusador como constitutivo del delito **de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas**, descrito en el **artículo 3 de la Ley 20.000** sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en el que se le atribuyó al acusado participación de **autor** de conformidad al artículo 15 N° 1 del Código Penal, e indicando que no concurren circunstancias agravantes de responsabilidad penal, pero si la circunstancia especial del artículo 62 de aquella ley, pidió la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa de 400 Unidades Tributarias Mensuales, el comiso y destrucción de las especies incautadas, determinación de su huella genética, las penas accesorias legales, sin perjuicio de las costas de la causa.

Oídos los intervinientes y considerando que:

PRIMERO: Alegatos apertura de los intervinientes. El **fiscal** hizo promesa de acreditar los hechos de la acusación mediante la prueba ofrecida al efecto, se probaría el hecho punible y la participación, por lo cual pidió, en consecuencia, un veredicto condenatorio, y la **defensa letrada**, escuetamente, argumentó que controvertiría la imputación fiscal, y, así, sin poder derribarse la presunción de inocencia, pidió la absolución de su defendido.

SEGUNDO: Ejercicio del derecho a declarar del acusado. Advertido del derecho conferido en el artículo 326 del Código Procesal Penal, **MAURICIO DANIEL CADAGÁN ANDRADE**, sostuvo que se mantenía en silencio.



Al final del debate se mantuvo igualmente silente.

TERCERO: Sobre convenciones de prueba. No hubo convención probatoria alguna.

CUARTO: Material probatorio incorporado al juicio por la fiscalía. Para sostener su acusación el Ministerio Público se valió de la declaración de dos testigos funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, además de un set de fotografías, diversa prueba documental, y como prueba pericial, vía artículo 315 del Código del ramo, del resultado del trabajo de dos peritos de instituciones estatales de salud.

QUINTO: Prueba de descargo. Por su lado, la defensa no ofreció prueba alguna.

SEXTO: Alegatos de clausura. Una vez concluida la etapa probatoria, como alegato de cierre el fiscal señaló, en lo medular, que con la prueba rendida se había logrado acreditar por medio de la declaración del personal policial con la utilización del ejemplar canino Goku la detección de la sustancia, su incautación y el carácter de proscrita de la misma, tanto por la prueba de campo como por el informe pericial, siendo notoriamente conocida su peligrosidad para la salud pública por el tribunal, y la participación culpable del imputado, con la misma declaración del guía canino y del señor Bravo, que precisamente fue quien incautó la sustancia al pasajero número 16, como se muestra en la fotografía, siendo este testigo con 8 años de experiencia en la Brigada Antinarcótico, quien ilustró sobre la cantidad de droga, lo que se obtiene de ella cuando se efectúa la venta al menudeo y el valor de esta, por todo lo cual solicitó veredicto condenatorio.

La defensa letrada sostuvo, en resumen, al contrario, que insistía en absolucón de su representado por dos órdenes de ideas: la prueba rendida y lo que consta en el propio auto apertura, en la que se lee que la fecha de los hechos ocurrieron en enero del año 2024, cuando conforme a la prueba rendida, según la declaración de los funcionarios, por un procedimiento en flagrancia, ocurrió en el mes de febrero del año 2024, por lo que conforme al artículo 197 necesariamente se debe absolver de la acusación presentada, dado que la prueba es conteste en que la detención se produjo cerca de las 6:30 horas de la mañana del día 3 de febrero del año 2024, por tanto, conforme al principio de congruencia que enmarca todo el sistema procesal penal, no es posible condenar a su presentado.

Solo la fiscalía replicó señalando que el dato aludido por el defensor es solo un error de referencia del propio fiscal al preparar la acusación de entre muchas que se efectúan en la zona, y que no puede significar sorpresa ni causa suficiente para lo pretendido por la contraria.

SEPTIMO: Cuestiones fácticas no controvertidas y núcleo central de la controversia. Al finalizar el debate quedó en evidencia que la cuestión fundamental planteada entre los intervinientes, a raíz de la petición concreta de la defensa al señalar expresamente que alegaba por la absolucón de su cliente, aun cuando sin controvertir los hechos ni su calificación jurídica, era el cuestionamiento por falta de congruencia de la acusación por un error en la determinación de la fecha de comisión del delito. De este modo, no se discutió que el acusado fue detenido en horas de la madrugada de un día determinado en 2024, luego de ser sorprendido a bordo de un bus fiscalizado en el peaje Púa de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Perquenco, llevando consigo droga en una mochila de su propiedad, sin contar con autorización para ello, pero sí que eso ocurrió el 3 de febrero, no de enero de ese año, como se consignó en la acusación.

Sin perjuicio de lo dicho, el sostenedor de la acción procesal debía cumplir la promesa que formuló en su alegato de apertura para obtener la condena que pidió, en definitiva, dada la protección constitucional y legal que ampara a todo acusado de presumírsele inocente de toda imputación penal que, como carga, soporta exclusivamente el Ministerio Público, salvo prueba en contrario, ante una tesis alterna o de coartada.

De este modo, debemos recordar que los asertos incriminatorios debían ser objeto de prueba suficiente para que el tribunal pudiera adquirir la convicción acerca de la efectividad de estos y de la participación atribuida al acusado, y así obtener el fiscal en su pretensión, con la



misión de superar el estándar de la “duda razonable”, aquella duda que, dicho de manera sencilla, permite legítimamente establecer que los hechos no se verificaron del modo indicado por el Ministerio Público, como se regula en el artículo 340 del Código Procesal Penal, y con las reglas limitadoras del artículo 297.

OCTAVO: Valoración general del material de prueba. Así entonces, ¿qué es lo que logró el acusador en este caso? Precisamente con el mérito de las probanzas incorporadas, como se dijo, consistentes en las declaraciones de los testigos que depusieron ante estrados, quienes dieron suficiente razón de sus dichos, respecto de un procedimiento policial desplegado en situación de flagrancia, junto al resultado de sendos informes químicos de los que se dio cuenta vía artículo 315 del Código Procesal Penal, acerca de la naturaleza de las sustancias que fueron descubiertas en poder del acusado, más fotografías y documentos incorporados por la acusadora, teniendo en consideración que la prueba aludida no fue contradicha o desvirtuada por la contraria, que se había logrado acreditar, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de los hechos de que daba cuenta la acusación, acaeciendo, eso sí, el día 3 de febrero de 2024 en la comuna de Perquenco, calificando en la figura penal que describe el artículo 3, en relación al artículo 1 de la Ley 20.000, como delito consumado de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, y que con esa misma prueba había quedado en evidencia que en todo ello el acusado tuvo una participación inmediata y directa.

NOVENO: Valoración particular del material probatorio. Para concluir de la manera como se expresó en la audiencia de juicio, se dio valor de suficiente y bastante convicción a la prueba de cargo que se analizará a continuación, por lo que en dicha base se darán por establecidos los hechos fijados en el motivo que sigue.

En efecto, concurrió en primer lugar, **Gabriel Andrés Ortiz Iagos**, agente policial de la Policía de Investigaciones con asiento en Angol, quien depuso señalando, en síntesis, que el día 3 de febrero del año 2024 alrededor de las 6:30 de la mañana se realizó un control a un bus de la empresa Ivergrama, patente JGRZ 21, por el oficial Luis Bravo, quien se subió para verificar y luego el testigo con el ejemplar canino GOKU, el cual hizo un circuito en el segundo piso, dando una alerta positiva en el asiento 16, y luego se hizo un control de identidad al imputado en este caso, mientras seguía haciendo el recorrido con el perro. Ese día el equipo de trabajo estaba conformado además de él con el can y del subcomisario Luis Bravo, con la inspectora Valentina Pérez, que le tocó prestar colaboración en la operación con Goku, quien hizo una marca activa consistentes en rasguñar una mochila negra que iba en los pies del imputado. Después de ello, siguieron haciendo el circuito por el segundo piso, luego el primero y al final en el maletero, y tiene entendido, que se le hace un control de identidad a la persona y se le registró las vestimentas.

Y, en segundo lugar, compareció, **Luis Alejandro Bravo Astudillo**, subcomisario de Policía de Investigaciones, corroborando la versión del testigo anterior, precisando que el 2 de febrero de 2024 se comunicó con fiscal de turno de primeras diligencias para un control terrestre antinarcóticos en plaza peaje de Púa en ruta 5 sur, km 653 en la comuna de Perquenco, que se haría en la madrugada del día 3 de febrero. Dio cuenta que ese día se hizo en control carretero junto a la inspectora Pérez y al agente Policial Ortiz con el ejemplar canino GOKU, y a las 06.30 se hizo una detención del bus Ivergrama con recorrido de Santiago a Villarrica, patente JGZR321.

Para acreditar la existencia del mencionado vehículo de transporte de pasajeros se introdujo al juicio el certificado de la inscripción RNV patente JGRZ.21 respecto de un bus año 2017 Scania color blanco gris azul amarillo de sociedad de transporte Ivergrama SPA.

Durante la declaración del testigo Bravo en referencia se incorporó, además, el juego de **imágenes fotográficas** ofrecidas al efecto y este señaló que en ellas se apreciaba: En foto 1, como se comunica con el conductor, este le indica que tiene pasajeros. Agregó que se verificó en



el segundo piso y luego subió Ortiz con GOKU, y a la revisión del bus se dirigió pasando por el asiento 16 donde venía un masculino que dio alerta positivo a una mochila negra Xtech debajo del asiento 16, y dada esa alerta se realizó un control de identidad vía artículo 85 del Código Procesal Penal, siendo identificado como Mauricio Daniel Cadagán Andrade, quien consultado en el sistema registraba una detención por infracción a la Ley 20.000 en el año 2020, sin otros encargos en su contra. En foto, 2, el bus por su parte o vista trasera; en foto 3, fijación del número de asiento 16 en que iba sentado Cadagán; en foto 4, la mochila negra con leyenda Xtech que transportaba el imputado Cadegán; en foto 5, revisión del interior de la mochila en la cual se encontraba primero un contenedor de alusa transparente con una sustancia vegetal verde seco dubitada como alucinógeno a la que se hizo prueba de campo que arrojó positivo a cannabis; foto 6, un segundo contenedor de las mismas características, donde portaba una sustancia compacta de color blanco que sometida a prueba de campo arrojó positivo a cocaína, realizada por el testigo en presencia del detenido; en foto 7, nómina de pasajeros solicitada al conductor y en asiento 16 el nombre de Mauricio Cadagán Andrade; en foto 8, en contenedor con la sustancia compacta blanca positiva para cocaína; en foto 9, el contenedor de la sustancia verde positiva para cannabis; en foto 10, el pesaje de la cocaína que arrojó un peso bruto de 385 gramos; en foto 11, el contendor de cannabis con un peso de 310 gramos. El testigo señaló que, por su experiencia, la cantidad incautada de cocaína fraccionada en dosis de 0,5 gramos daría para más de 600 dosis, con un valor cercano de 7 millones de pesos, y el cannabis, calculado en 10 mil por gramo la cantidad incautada es un equivalente a 300 dosis y 3 millones de pesos de ganancia.

Finalmente, a las preguntas del defensor, señaló que detuvo al acusado, se levantó el acta de registro de detenido, que fue firmada por ellos, así como las actas de la incautación y entrega de elementos, y se le tomó una declaración, todo ello con fecha 3 de febrero del año 2024.

Luego, se introdujeron como prueba documental, las **actas de prueba de campo** de fechas 3 de febrero de 2024 suscritas por el testigo Bravo y la funcionaria Pérez, donde aparecen los resultados de esa medición efectuada en el peaje Púa a las 06:38 h, primero, a una sustancia pastosa en polvo color blanco incautada al acusado Cadagán que dio coloración positiva ante la presencia de clorhidrato de cocaína, y segundo, a Cannabis y a una sustancia vegetal color verde que dio positivo a presencia de cannabis, y consecuentemente con ello, las **actas de incautación** de las especies aludidas, y de un celular REDMI negro, y las **acta de pesaje** de esas sustancias, efectuado el mismo día, arrojando la primera sustancia, dubitada como cocaína, un total bruto de 385 gramos, y la segunda, la sustancia dubitada como cannabis, un peso bruto de 310 gramos, tal como precisó el testigo Bravo en su declaración cuando refirió acerca de las fotos que se le mostraron.

A continuación, para dar cuenta de la trazabilidad de las sustancias incautadas fueron introducidos los documentos emitidos por el jefe de la Brigada pertinente de la PDI para enviar a análisis pericial químico de cada una, **ORD N° 34** de igual fecha, dirigido al Servicio de Salud Araucanía Sur, **Reservados 340** de 7 de febrero de 2024 de ese servicio, Oficina de Decomisos, remitiendo a Laboratorio de Salud Pública de esta región un gramo de la muestra 364-2024 de la sustancia vegetal en comento; y **el Reservado N° 176** de mismo servicio anteriormente citado dirigido al Instituyo de Salud Pública, Unidad de Recepción de Muestras, remitiendo un gramo de la sustancia sólida en polvo color blanco. Y a su turno, el **acta de recepción N° 194/2024**, con data de 5 de febrero de 2024, por parte de la aludida Oficina de Decomisos del Servicio de Salud Araucanía Sur, correspondiente al decomiso efectuado por la Brigada Antinarcótico y Contra el Crimen Organizado, como sustancias presuntas cocaína, con peso bruto 385 gramos y neto 342 gramos, y marihuana por 309 gramos bruto y neto 254, sin devolver envoltorios por contener restos de sustancias, respecto del imputado Mauricio Daniel Cadagán Andrade, y el **Acta de Destrucción N° 194/2023** de la droga incautada, y a la espera de análisis; y los **reservados N° 3123-2024 y 747/2024** de aquellos servicios especializados de envío de los resultado del análisis químico de la droga en comento tanto por el Servicio de Salud Local como



del Instituto de Salud Pública, documentos no controvertidos, que respaldaron todo lo aseverado por los testigos en comento.

Finalmente, para demostrar científicamente la naturaleza de las sustancias incautadas al acusado Cadagán, como prueba pericial se incorporó vía artículo 315 del Código del ramo, primero, el informe 351 de fecha 17 de mayo de 2024, sobre análisis de decomiso que correspondía a marihuana incautada y recibida por acta 194, elaborado por el bioquímico **Luis Quintana Díaz**, concluyendo que, al análisis químico cuantitativo, se revelaron niveles detectables y cuantificables del compuesto cannabinoides propios de cannabis SP, señalando en torno al grado de pureza de la muestra que corresponde a material vegetal con características propias de cannabis, sin evidencias de mezcla con otros elementos herbáceos, contaminantes u otras sustancias, y era cannabis 100% pura. Y, asimismo, se introdujo el resultado del trabajo de la química **Sonia Rojas Rondón**, plasmado en el informe de análisis 3123-2024, de fecha 19 de julio de 2024, dando cuenta que la muestra de las sustancias recibidas sometidas a la prueba de cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama, para separar los componentes y determinar su porcentaje de pureza, mediante estándares, arrojó que se trataba de cocaína clorhidrato con una pureza de 73%, y en todos los casos, se introdujo como anexo al peritaje el informe de peligrosidad de cada sustancia.

DECIMO: Determinación del hecho punible. La contundencia, precisión y la claridad de la información que aportaron en su conjunto los medios referidos, bastante para remitirnos a lo que ya esbozamos, ponderados en general y en particular, con libertad, sin apartarse de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia ni del conocimiento científicamente afianzado, permitió a este tribunal al superarse toda duda razonable, adquirir la convicción de que ***el día 3 de febrero de 2024, aproximadamente a las 06.40 hrs, personal de policía de investigaciones se encontraba desarrollando funciones en ruta 5 sur, km. 623, sector peaje Púa, comuna de Perquenco, oportunidad en la cual procedieron a fiscalizar el bus de la empresa “Ivergrama”, patente JGRZ.21, itinerario Santiago Villarrica, oportunidad en la cual, auxiliados por perros detectores de drogas, constataron que el imputado MAURICIO DANIEL CADAGÁN ANDRADE, que se trasladaba como pasajero del precitado bus, específicamente en el asiento 16, transportaba, guardaba, portaba y mantenía, en una mochila, la cantidad de 310 gramos de una sustancia que, sometida a prueba de campo, arrojó positivo a la presencia de THC cannabis; y, 385 gramos de una sustancia en polvo color blanco, que arrojó positivo para clorhidrato de cocaína.***

La determinación de la fecha señalada, esto es, 3 de febrero de 2024, ha sido establecida por el tribunal, desechando la alegación de la defensa, primero, porque aquello fluye con absoluta claridad tanto de los testimonios como de los documentos de orden policial emitidos ese día, analizados precedentemente, y segundo, por cuanto, el mero error de referencia al que hizo alusión el fiscal del Ministerio Público, haciéndose cargo de dicho reproche, resulta justificado precisamente como tal al haberse producido solo al momento de haberse presentado la acusación para la preparación del juicio oral, pues no se arguyó nada respecto de ese dato durante la investigación ni se indicó que el control de la detención y formalización de la investigación hayan sido practicadas en fecha distinta, resultando en este caso en un yerro irrelevante que no altera la esencia del principio de congruencia ni generó indefensión por sorpresa en el acusado.

UNDECIMO: Sobre la participación del acusado. La prueba testifical analizada, esto es, la declaración de los policías que intervinieron directamente en el procedimiento, permitió identificar sin lugar a dudas que el sujeto que transportaba la droga en comento en su mochila negra era el acusado de marras, tanto porque en la nómina de pasajeros que fue consultada con el conductor del bus Ivergrama, tal como ilustra la fotografía 7 incorporada durante el relato del funcionario Bravo donde aparece que quien ocupaba el asiento 16, lugar en que fue generada la alerta por el can Goku, era “Mauricio Cadagán”, y a su respecto fue que se hizo el respectivo



control de identidad y posterior reconocimiento en la sala de audiencias, correspondiendo aquel individuo al acusado Mauricio Daniel Cadagán Andrade, por lo cual se pudo tener por acreditado de un modo incuestionable la participación del acusado como pretendido único autor del hecho punible que nos ocupa, en la hipótesis del artículo 15 N° 1 del Código Penal al haber perpetrado la conducta de manera directa e inmediata, quedando fuera de toda duda que se trata del sujeto responsable penalmente del delito descrito en el motivo anterior.

DUODÉCIMO: Calificación jurídica del hecho descrito e *iter criminis*. Sin lugar a dudas, las que tampoco fueron introducidas por la defensa, teniendo en especial consideración la apreciación científica, incuestionada acerca de la naturaleza de las sustancias decomisadas e incautada, y en las cantidades no pequeñas indicadas de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, como se dijo, el tribunal estimó que los hechos descritos en el motivo décimo son constitutivos del tipo penal de **tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes**, establecido en el artículo 3 de la Ley N° 20.000, en grado de desarrollo (o *iter criminis*) de **consumado**. En la especie, se verificaron cada uno de los elementos necesarios para su adecuada y precisa configuración, como se desprende inequívocamente de lo que se ha venido razonando.

En efecto, en lo que nos interesa, atendidas las características del caso y la descripción de los hechos realizada más arriba, el artículo 3° citado, dispone que las penas establecidas en el artículo 1°, -de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales-, se aplicarán a quienes *trafiquen, bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere* —esto es, las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud-, y es la misma norma la que se encarga de definir y precisar que se *entiende que trafican*, esto es, presume que lo hacen, *los que, sin contar con la autorización competente, transporten o porten tales sustancias*, que fue precisamente la conducta que desplegó el acusado ese día 3 de febrero de 2024 llevando la droga en su mochila a bordo de un bus que transitaba por la vía pública de la comuna de Perquenco, y que esas sustancias, estando incorporadas en la lista del artículo 1 del Reglamento de la Ley N° 20.000, son consideradas jurídicamente drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, como indica el servicio especializado en informe de peligrosidad igualmente introducido a juicio.

A esta calificación se ha llegado, luego establecer, más allá de toda duda razonable, además, que el acusado, que poseía las sustancias descritas, careciendo de la autorización debida -conducta que cumple a cabalidad el tipo penal en estudio, toda vez que es el propio legislador quien se encarga de señalar en lo estrictamente fáctico que el delito de tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes, se satisface en su configuración con cualquiera de los verbos rectores de mantener, transportar, portar, mantener o guardar, sin autorización competente, que es lo que hacía precisamente el agente en esta causa-, no podía menos que saber, como sujeto activo, que se trataba de era droga, quedando así satisfecha también la exigencia y existencia del elemento subjetivo del tipo en comento, pues, actuó con pleno dominio volitivo para ello, de lo contrario se habría alegado por la defensa, y como indica la costumbre, con la finalidad última de su distribución en la población.

DECIMO TERCERO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. El Ministerio Público señaló que no concurrían circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, e incorporando el extracto de filiación y antecedentes del encausado, pudimos advertir que cuenta con una condena previa por un simple delito de fecha 22 de noviembre de 2021 por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de drogas.

DECIMO CUARTO: Determinación de la pena. De esta forma, ya al finalizar, para fijar el quantum concreto de la sanción a imponer, se ha de considerar, que el delito consumado del artículo 3 de la Ley N° 20.000, tiene asignada, en abstracto, una pena de presidio mayor en



sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales; que, no concurren circunstancias atenuante o agravantes de responsabilidad criminal, quedando impedido el tribunal, en consecuencia, como prevé el artículo 68 del mismo código, de aplicar el grado máximo de la pena; y que, finalmente, conforme a las reglas del artículo 69 del código punitivo, pudiendo recorrer la pena en toda su extensión, a los fines de establecer el castigo en concreto, no se advierte justificación para la pena solicitada en definitiva por el fiscal en la acusación y audiencia del artículo 343 del código procesal, sino más bien la imposibilidad para despegarse del piso del menor grado posible ya que, por cierto, no se ventiló ningún antecedente acerca de extensión alguna del mal producto del delito, por lo que aquella se aplicará en el mínimo indicado, por ser condigno con el nivel de reproche merecido.

A su turno, se rebajará prudencialmente la multa a imponer, conforme lo autoriza el artículo 52 de la Ley 20.000, por estimar que el sentenciado ha visto mermada su posibilidad de generar recursos económicos, habida cuenta de que el procedimiento en su contra se siguió estando privado de libertad, presumiéndose legalmente su pobreza de acuerdo con el artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales, y por haber sido representado por abogado de la Defensoría Penal Pública. Y será eximido del pago de costas, precisamente por lo que previene esta última norma citada.

DECIMO QUINTO: Sobre la aplicación de la Ley 18.216. Teniendo presente que el artículo 62 de la Ley N° 20.000 no permite expresamente aplicar ninguna de las penas sustitutivas contempladas en la Ley N° 18.216 a la persona que haya sido condenada con anterioridad por alguno de los crímenes o simples delitos contemplados en esta ley en virtud de sentencia ejecutoriada, como ha quedado acreditado en este caso según lo dicho en el motivo anterior, a más de que la sanción que se impondrá se encuentra en fuera del límite superior para poder gozar de ellas, el castigo privativo de libertad que se aplicará deberá ser cumplido efectiva y corporalmente.

Por dichas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 5, 7, 15 N° 1, 29, y 70 del Código Penal; y artículos 1, 4, 47, 297, 340, 341, 342 y siguientes, 339 al 343 del Código Procesal Penal, este tribunal de juicio oral en lo penal de Temuco **RESUELVE y DECLARA:**

I. Que, se **CONDENA**, al acusado **MAURICIO DANIEL CADAGÁN ANDRADE**, cédula de identidad N.º **21.026.972-K**, ya singularizado en lo demás, como **autor** del delito **consumado de tráfico ilícito de drogas o sustancias estupefacientes**, establecido en el artículo 3 de la Ley N° 20.000, perpetrado el día 3 de febrero de 2024 en la comuna de Perquenco, a la pena principal de **cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo** y al pago de una multa **cuatro unidades tributarias mensuales**, que, por aplicación del artículo 70 del Código Penal, podrá pagar en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas de un cuarto ($\frac{1}{4}$) de UTM, a contar del mes siguiente al que quede ejecutoriada esta sentencia, bajo el apercibimiento de que el no pago de una sola de las parcialidades, hará exigible el total de la multa adeudada.

II. Que, se lo condena accesoriamente a la pena de **inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena principal**, previsto en el artículo 28 del Código Penal y el comiso y destrucción de las especies incautadas, de acuerdo con el artículo 31 del mismo cuerpo legal.

III. Que, la **pena privativa de libertad deberá ser cumplida de manera efectiva**.

IV. Que, para fines estadísticos o administrativos, le servirá de **abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad** por esta causa, desde el 3 de febrero de 2024 hasta el día de hoy, la que operó bajo las medidas cautelares ininterrumpidas de prisión preventiva, internación provisional, y nuevamente prisión preventiva, sin perjuicio de lo que deba fijarse con mayores y



mejores antecedentes por el tribunal encargado de la ejecución de esta sentencia.

V. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970 y su Reglamento, si no se hubiere ya efectuado, se ordena la toma de muestra biológica al condenado con la finalidad de determinar su huella genética, y su posterior inclusión en el registro de condenados que al efecto administra el Servicio de Registro Civil e Identificación.

VI. Que, se **exime del pago de costas** al acusado por haber estado privado de libertad durante la secuela de la investigación y del presente juicio, al presumirse legalmente su pobreza.

Ejecutoriada que sea la presente resolución, remítase copia autorizada de la misma al Juzgado de Garantía respectivo, para los fines de lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales.

Remítase formato digital de esta sentencia definitiva por la Unidad de Administración de Causas a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el Tribunal.

Regístrese y archívese.

Redactada por el juez titular, José Ignacio Rau Atria.

R.U.C.: 2410006294-8

R.I.T.: 37 – 2025

CODIGO DELITO: 7007

Pronunciada por las juezas Patricia Abollado Vivanco, presidiendo, y Cecilia Subiabre Tapia y el juez José Ignacio Rau Atria.

